



Movimientos sociales y autonomía colectiva: la política de la esperanza en América Latina

Una reseña sobre el libro compilado por Ana Dinerstein.

// *Martín Obregon**

■ Los grandes procesos de movilización popular que tuvieron lugar en América Latina en las últimas décadas han convertido a la región en un verdadero “laboratorio político”. Al calor de la lucha contra el neoliberalismo y en el contexto de una fuerte crisis de las formas tradicionales de participación política, surgieron y se consolidaron una gran cantidad de movimientos sociales que se construyeron por fuera del Estado, de los partidos políticos y de las centrales sindicales.

Editorial: Capital Intelectual

País: Argentina

Año: 2013

Compiladora: Ana Dinerstein

Autores/as: Daniel Contartese // Melina Deledicque // Juan Pablo Ferrero

// Luciana Ghiotto // Rodrigo Pascual

**Profesor en Historia e investigador, UNLP. obregonmartin@yahoo.com.ar*

Muchos de estos movimientos se forjaron en una matriz anticapitalista y comparten el hecho de ser construcciones prefigurativas, ya que no se conciben como meras herramientas para la obtención de un fin ulterior (la construcción del socialismo) sino que intentan articular en sus territorios un conjunto de prácticas que buscan trascender el horizonte del capitalismo “en el aquí y el ahora”. En torno a estos movimientos, a quienes los/as autores/as vinculan con la construcción de un proyecto de autonomía colectiva, se despliega la reflexión acerca de un conjunto de cuestiones fundamentales a la hora de pensar y hacer política en América Latina desde una perspectiva emancipadora.

En este sentido, el trabajo se focaliza tanto en las dificultades inherentes a la búsqueda de la autonomía colectiva, entendida como un proceso abierto e indeterminado, como en la tensión permanente – y en alguna medida insoluble – que habita la relación entre los movimientos sociales y el Estado. Sin embargo, como se advierte en reiteradas ocasiones a lo largo de la investigación, los análisis intentan superar las perspectivas que plantean, por un lado, que “hay que luchar contra el Estado para eliminarlo” y aquellas que sostienen, por otro, que de lo que se trata es de “ganar territorios en el Estado que sirvan para hacer avanzar las conquistas populares”, ya que los procesos de construcción de autonomía colectiva no se pueden comprender solamente en términos de resistencia o concomitancia frente al Estado, sino que van más allá del Estado e involucran un complejo conjunto de mediaciones objetivas y subjetivas, estatales y no estatales.

Los movimientos sociales más consecuentes y radicales en la búsqueda de la autonomía colectiva han sido objeto de diferentes mecanismos represivos por parte de fuerzas estatales o paraestatales. Sin embargo, en este trabajo se privilegia el análisis de una dimensión menos explorada, referida a las diferentes políticas gubernamentales tendientes a la cooptación e integración de las demandas (y en ocasiones, de los líderes) de estos movimientos sociales autónomos. El cambio de enfoque en las políticas internacionales y de desarrollo, promovido por instituciones como el Banco Mundial bajo las premisas de la llamada “economía social y solidaria”, favoreció la adopción por parte de los estados de un conjunto de políticas sociales y programas gubernamentales que, barnizados con un discurso “progresista” e “inclusivo” apunta-

ron en realidad a que los movimientos sociales se adapten a las lógicas del sistema y canalicen institucionalmente sus demandas.

Sin embargo, como se demuestra en los casos analizados a lo largo del libro, estos programas suelen resultar atractivos para los movimientos en función de que implican recursos materiales y técnicos que pueden llegar a potenciar sus niveles de desarrollo. El desafío, para los movimientos sociales, consiste en cómo utilizar y resignificar estas políticas estatales sin resignar su autonomía política. La construcción de la autonomía colectiva resulta, en suma, un proceso complejo, no exento de ambigüedades, contradicciones y tensiones, donde lo que prevalece es la búsqueda y la exploración de nuevos caminos y cuyo resultado dependerá de múltiples factores.

La tensión entre la rebelión y la institucionalización constituye un elemento estructural a lo largo de la experiencia histórica de los movimientos sociales autónomos; pero al mismo tiempo – y esta es una de las ideas más sugerentes del libro – hay en ellos un núcleo irreductible de planteos que no pueden ser integrados por el Estado dentro de los marcos del sistema económico y social vigente. A lo largo del trabajo, esta hipótesis, que funciona como un hilo conductor que guía toda la investigación, es cotejada a partir de cuatro de las experiencias de organización popular más potentes de las últimas décadas: las Juntas Vecinales de El Alto, en Bolivia; las organizaciones piqueteras en Argentina; el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil y las comunidades zapatistas en Chiapas, en el sur de México.

A lo largo del segundo capítulo de la obra, Daniel Contartese y Melina Deledicque reconstruyen la historia de las Juntas Vecinales de El Alto, desde sus orígenes, en la década del cincuenta, hasta la actualidad, analizando su funcionamiento interno, sus métodos de lucha y su incidencia en las luchas populares a lo largo de las últimas décadas. Las Juntas Vecinales –que en 1979 se articularon en la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE)– surgieron con el objetivo de resolver problemas concretos de los sectores populares que se estaban estableciendo en las afueras de La Paz (servicios públicos, vivienda, salud, transporte) y que no encontraban respuestas positivas por parte del Estado ni de las empresas privadas. A partir de formas organizativas asamblearias y de una práctica política basada en la acción directa, las juntas se con-

virtieron en una de las expresiones más potentes y combativas de los nuevos movimientos sociales autónomos.

Ante su evidente crecimiento, desde el Estado se buscó institucionalizar su funcionamiento a partir de una ley – la Ley de Participación Popular, de 1994 – que al mismo tiempo que otorgaba un reconocimiento legal a estas instancias de organización “desde abajo”, buscaba limitar su autonomía y ceñir sus alcances a un marco local o regional.

Sin embargo, como sostienen Contartese y Deledicque, las Juntas Vecinales fueron capaces de “pilotear” dicha tensión entre la “autoorganización popular” y las tendencias a la “institucionalización”, adecuándose al nuevo marco jurídico exigido por el Estado pero sin renunciar a su radicalidad, como pudo verse con toda claridad tanto en la “guerra del agua” (2000) como en la “guerra del gas” (2003), formidables procesos de insurrección popular donde las Juntas Vecinales se constituyeron en una de las columnas vertebrales de la protesta.

Por otro lado, la Ley de Participación Popular, que intentaba contener el poder de las juntas, terminó abriendo un nuevo horizonte de “oportunidades políticas”, posibilitando a las organizaciones sociales contar con un instrumento político y abriendo un proceso que desembocaría en el triunfo electoral del MAS. Con Evo Morales en el gobierno, las tensiones volvieron a hacerse presentes, debido a la tendencia del gobierno a subordinar a las organizaciones sociales; sin embargo, la dimensión autónoma de estas últimas terminará imponiéndose, como pudo verse en ocasión de las luchas contra el “gasolinazo” o en el conflicto del TIPNIS.

Los mismos nudos problemáticos, pero esta vez a partir de la experiencia de las organizaciones piqueteras, son abordados por Ana Dinerstein en el tercer capítulo del libro. En Argentina, desde fines de la década del '90, a partir de una metodología de lucha que se reveló efectiva – el corte de ruta – y de un eje reivindicativo muy concreto – la demanda de trabajo en un contexto donde la desocupación alcanzaba niveles cercanos al 20% – surgieron movimientos de trabajadores desocupados que presionaron directamente sobre diferentes reparticiones estatales con el objetivo de obtener planes de empleo y alimentos para sus comedores.

Como sostiene Dinerstein, una porción significativa de las organizaciones piqueteras buscaban que sus integrantes pudieran reinsertarse en el mercado de trabajo, lo que no implicaba necesariamente una transformación radical de la estructura económica y social, ya que dicho objetivo podía lograrse en el marco de un “capitalismo sano”, que permitiera políticas redistributivas y ciertos niveles de inclusión social. Sin embargo, algunos movimientos de trabajadores desocupados levantaron la consigna de “trabajo digno” desde una perspectiva anti-capitalista. Los planes de empleo, concebidos en un primer momento como una forma de contener y desarticular la protesta social, fueron resignificados por estas organizaciones, que se plantearon la construcción de una política autónoma a partir de la utilización de recursos estatales obtenidos a partir de la lucha. De esta forma, en los territorios en los que surgieron estas organizaciones, los planes de empleo fueron utilizados para promover proyectos productivos y comunitarios que se basaban en lógicas antagónicas a las promovidas por el mercado y por el propio sistema capitalista.

La Masacre de Avellaneda, en junio de 2002, y las multitudinarias movilizaciones populares que le siguieron marcaron un punto de inflexión, señalando claramente los límites de una política basada en la represión abierta de los movimientos más radicales, expresados en aquel momento por la Coordinadora Aníbal Verón. A partir del gobierno de Néstor Kirchner se puso de manifiesto un cambio en las políticas gubernamentales, que apuntaron a la integración e institucionalización de los movimientos a través de la implementación de programas de empleo basados en la denominada “economía social y solidaria”, en sintonía con los lineamientos generales impulsados por la OIT y el Banco Mundial en el contexto, ahora, de un proyecto económico “neodesarrollista”.

Para Dinerstein, estas políticas – que implicaron un “doble proceso de reconocimiento y desradicalización” – asignaban recursos a los movimientos de desocupados al mismo tiempo que apuntaban a recortar su autonomía, favoreciendo la cooptación de algunas organizaciones y el aislamiento de otras. Sin embargo, las políticas gubernamentales siguen siendo incapaces de traducir la demanda de “trabajo digno” tal como aparece planteada en los movimientos más radicales, ya que ese planteo no puede ser asimilado sin que tenga lugar una profunda transformación económica y social.

La misma tensión entre la construcción autónoma de los movimientos populares y los intentos del Estado por canalizar institucionalmente ese potencial de transformación puede verse en el capítulo cuarto, donde Juan Pablo Ferrero analiza la experiencia del MST de Brasil. Desde sus orígenes, a comienzos de la década de los ochenta, y a lo largo de más de dos décadas, el MST centró sus reivindicaciones en la lucha por la tierra y en la necesidad de llevar adelante una reforma agraria integral. La radicalidad de esa demanda le permitía, desde un problemática concreta, formular un cuestionamiento global del sistema económico y social.

Sin embargo, las políticas estatales fueron poco a poco incorporando ese reclamo a la agenda pública, al mismo tiempo que se avanzaba en una reforma agraria extremadamente moderada – “por goteo”, en palabras del autor – que ya no ponía en peligro las bases estructurales del sistema y que podía coexistir pacíficamente con el nuevo modelo de los “agronegocios”, favorecido por los diferentes gobiernos en función de su capacidad para acrecentar el nivel de las exportaciones y la entrada de divisas.

En ese contexto, y cuando el reclamo original había sido parcialmente incorporado y “traducido” a la agenda de las políticas sociales, perdiendo su radicalidad inicial, el MST reorientó su estrategia a partir de la introducción de una nueva demanda que le restituía al movimiento la capacidad de impugnar estructuralmente el modelo: la de la “soberanía alimentaria”.

Esta nueva demanda, que no puede ser canalizada institucionalmente por el Estado sin afectar el actual modelo de los “agronegocios”, expresa ese exceso característico de los movimientos autónomos radicales que no encuentra “traducción” en las instituciones estatales y que sigue anticipando lo que aún no tiene lugar dentro del sistema capitalista. Como en el caso anterior, asistimos a un proceso de “institucionalización conflictiva”, donde el MST reafirma su carácter emancipador y establece un nuevo horizonte para la inscripción de luchas radicales en contra del capitalismo.

El caso de los zapatistas es analizado en el capítulo cinco, donde Ana Dinerstein, Luciana Ghiotto y Rodrigo Pascual sostienen que el proceso de construcción de autonomía que se hace visible con el levantamiento

chiapaneco de 1994 se nutre de diversas experiencias y articula diferentes memorias históricas, desde las tradiciones de las comunidades indígenas hasta las guerrillas de los años ochentas, pasando por la Teología de la Liberación.

El levantamiento zapatista implicó, en los territorios que quedaron bajo el control de las comunidades indígenas, el surgimiento de una nueva forma de hacer política que supuso, en muchas ocasiones, una reactivación de prácticas ancestrales que habían sido negadas por el Estado mexicano. De esta forma, el zapatismo significó un cuestionamiento global al sistema y un desafío al poder estatal, que debió responder modificando tanto la legislación vigente como sus políticas públicas. Es por ello que, afirman los autores, se trató de un movimiento que – al igual que en los casos referidos anteriormente – surgió “con/ contra y más allá del Estado”.

La consolidación del EZLN obligó al estado mexicano a la firma, en 1996, de los acuerdos de paz de San Andrés, mediante los cuáles se comprometía, entre otras cosas, a reformar la constitución nacional, garantizando el derecho al autogobierno de los pueblos indígenas. Sin embargo, los acuerdos de paz de San Andrés nunca fueron cumplidos por el gobierno y cuando la constitución mexicana fue finalmente modificada, en el año 2001, no se tuvieron en cuenta las exigencias del zapatismo; muy por el contrario, la nueva constitución – que incorporaba la figura del “municipio libre”, a tono con las políticas de descentralización neoliberal – fijaba de antemano el tipo de autoridad y la forma de elección que serían considerados válidos, desconociendo así el derecho al autogobierno que proclamaban las comunidades.

Frente a esta ofensiva política del Estado, los zapatistas implementaron una nueva estrategia civil basada en la “autonomía de facto”, a partir de la creación, en el año 2003, de las Juntas de Buen Gobierno. Estas juntas constituyen una de las formas de autogobierno más novedosas de América Latina, ya que toman en sus manos cuestiones vinculadas a la protección del medio ambiente, el trabajo, la administración de justicia, la salud, la educación y el reparto de tierras, contraponiendo el “nosotros” de las comunidades al individualismo capitalista.

Como hemos visto, en todos los casos, frente a la emergencia de movimientos radicales que implican un cuestionamiento estructural al sistema capitalista, los poderes estatales recurren a diferentes mecanismos tendientes a “integrar” sus demandas con el objeto de quitarles radicalidad. Sin embargo, las cuatro experiencias analizadas ponen de manifiesto la existencia de un conjunto de planteos que no encuentra traducción en las políticas estatales.

En palabras de los/as autores/as, siempre persiste un “espacio sin gramática”, una dimensión utópica que, al no encontrar referentes en el discurso estatal, constituye un impulso para luchar por lo que todavía no es, pero puede llegar a ser. Desde esta perspectiva, y siguiendo a Ernst Bloch, el futuro no aparece como una mera continuación del presente sino como pura potencialidad en el camino de la construcción de un proyecto emancipador.